

LAS REVUELTAS ÁRABES Y LA CRISIS DEL ESTADO-NACIÓN

Las ondas de choque de la rebelión popular que se extiende por todo el mundo árabe desde principios de 2011 han puesto a prueba el largo dominio occidental sobre la región, destinado a asegurar el acceso al petróleo y el gas de Oriente Medio, al tiempo que amparaba la progresiva colonización israelí de Palestina. Los medios con los que se ejercía el control imperial quedaron vívidamente expuestos ante la opinión pública cuando los gobernantes occidentales se apresuraron a intentar «estabilizar» los estados que les habían servido durante mucho tiempo como intermediarios en la región. En Egipto, uno de los destinos favoritos de los vuelos de transporte de prisioneros de la CIA, la subvención anual de 1.300 millones de dólares en ayuda militar desde 1979 le había permitido al Pentágono establecer una línea directa con el alto mando del ejército, dándole a Washington un panel de control desde el que manejar la contención de las protestas de masas. El secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, hablaba por teléfono con El Cairo «cada pocas horas». Las exhortaciones cotidianas del gobierno estadounidense pedían al principio «una transición ordenada» cuando Mubarak abandonara el poder en septiembre; luego, cuando aumentó la presión de las masas, reclamó a su espía-jefe y transitorio vicepresidente, Omar Suleiman, «una transición ordenada *inmediata*»; finalmente, el 10 de febrero, Leon Pannetta, entonces director de la CIA*, anunció al Congreso estadounidense la toma del poder por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) un día antes de que sucediera. Todo indicaba la urgencia de las iniciativas estadounidenses para tratar de estabilizar el centro de gravedad del descontento árabe, un país de 80 millones de habitantes, mediante los mecanismos del Estado poscolonial.

El 19 de marzo el CSFA, presidido por el ministro de Defensa durante muchos años de Mubarak, Mohamed Hussein Tantawi, anunció un referéndum y enmiendas constitucionales supuestamente favorables a las fuerzas esencialmente conservadoras de la Hermandad Musulmana y el todavía poderoso Partido Nacional Democrático** en las elecciones parlamentarias y presi-

* Y desde el 1 de julio de 2011 nuevo secretario de Defensa [N. del T.].

** Miembro de la Internacional Socialista hasta el 1 de febrero [N. del T.].

denciales que debían tener lugar a finales de este año. Nuevos acontecimientos desde la destitución de Mubarak —el desmantelamiento de su gobierno y la disolución del Servicio de Investigaciones de la Seguridad del Estado (la policía política) en marzo de 2011; el arresto domiciliario de Mubarak y el encarcelamiento de otros altos funcionarios, así como la disolución y confiscación de los bienes del PND en abril— sólo se arrancaron a un renuente CSFA mediante prolongadas movilizaciones desde abajo. La influencia «estabilizadora» occidental ha sido igualmente evidente en la política exterior egipcia tras la caída de Mubarak. La primera decisión del CSFA fue proclamar su lealtad al tratado de 1979 con Israel, que abrogaba la soberanía egipcia incluso en parte de su propio territorio. Las tentativas iniciales de abrir la frontera con Gaza fueron pronto desechadas.

En Túnez, la responsabilidad del control de la rebelión recayó sobre la Unión Europea y en particular sobre la antigua potencia colonial, Francia. También allí se emplearon las palancas del Estado poscolonial pese a la resistencia desde abajo. La primera iniciativa de la ministra de Asuntos Exteriores francesa, Michèle Alliot-Marie, fue ofrecer el envío de algunas CRS, bien entrenadas en las batallas de la *banlieue*, para ayudar a sus colegas tunecinos a aplastar el movimiento de masas. Cuando el régimen se hundió y el antiguo presidente, Ben Ali, y su familia huyeron a Riad el 14 de enero, el ejército tomó el control de las calles y los edificios del gobierno y se esforzó por mantener en pie la antigua administración, con el respaldo del secretario de Asuntos Exteriores británico William Hague, quien llegó con promesas de ayuda. Le siguió un torrente de funcionarios de la Unión Europea, que llevaban consigo borradores de reformas aceptables. Pero el movimiento de masas mantuvo su impulso, dando lugar a primeros de marzo a la disolución del gobierno de transición y la convocatoria de una Asamblea Constituyente, sin cejar en su empeño de lograr el desmantelamiento del aparato de Seguridad del Estado, la disolución de los partidos del antiguo régimen y la expropiación de sus bienes. Las elecciones para la Asamblea Constituyente están previstas para el presente mes de octubre.

La estabilización suponía, pues, mantener el aparato de Estado de la dictadura prooccidental al tiempo que se eliminaba la carga que representaba la figura del dictador. Una variante de esa misma política se constata en la campaña de bombardeos contra las fuerzas de Gaddafi: los portavoces británico y estadounidense han dejado claro que no se trata de destruir la administración del Estado libio, sino «simplemente» —e ilegalmente— de deshacerse del dictador y su familia. El ataque aéreo de la OTAN —impulsado por Francia y Gran Bretaña, protagonistas de la intervención de 1956 en el canal de Suez, así como por los consejeros más belicosos del gobierno de Obama (Samantha Powers, Susan Rice)— se inició el 19 de marzo y todavía perduraba, con un número cada vez mayor de víctimas civiles, en el momento en que escribía estas líneas. Una de sus consecuencias ha sido frenar en seco cualquier movimiento de protesta independiente en Trípoli, al tiempo que subordinaba a los líderes de Bengasí al dictado occidental. El resultado final permanece incierto, pero la intención es obvia: desencadenan-

do con total impunidad su capacidad de fuego, Occidente pretende demostrar que mantiene las riendas de Oriente Medio y el norte de África.

En otros países –Baréin, Siria, Jordania, Marruecos– Washington y sus aliados se han limitado en gran medida a piadosos llamamientos al «diálogo» con los movimientos de protesta. En Yemen los intentos estadounidenses de apuntalar a un dictador al que el gobierno de Obama seguía armando hasta los dientes han puesto al país al borde de la guerra civil, pero otros gobernantes de la península Arábiga son considerados «seguros» por el momento. Los cálculos de Washington parecen ser que los reyes y emires pueden escapar al destino de los gobernantes no hereditarios de la región y que sólo hay que animarlos a suavizar su tiranía. El viaje de Cameron al Golfo en enero de 2011, acompañado de una delegación de fabricantes de armas británicos con la esperanza de mejorar los arsenales con los que los monarcas árabes aseguran su supervivencia a largo plazo, seguido de una parada en El Cairo para hacerse una foto con los manifestantes, desmiente cualquier preocupación real por el bienestar de los pueblos árabes, y su cinismo se ve subrayado por la urgencia que ha mostrado en desencadenar el poder aéreo imperial contra Libia. La «lucha contra el brutal dictador libio», cuyo rostro mal afeitado rozó recientemente la mejilla de otro primer ministro británico, da un nuevo giro a la estética del poder.

Caja de cambios imperial

El propio Estado poscolonial proporciona, así, un mecanismo clave de «control remoto» mediante el cual Occidente puede determinar la dirección de países formalmente emancipados de su tutela. En general, la estrategia estadounidense ha consistido en confiar las llaves del Estado a una clase gobernante subalterna, con la condición de que le dejen las puertas abiertas. Dentro de ese marco, Occidente permite distintos grados de expresión política popular, desde el nivel cero, bajo una dictadura, hasta la representación parlamentaria mediante elecciones que permiten sustituir a una fracción de la clase dominante por otra sin alterar los fundamentos del orden social, pasando por toda una variedad de regímenes procapitalistas más o menos autoritarios.

Esto no significa que la oposición popular no desempeñe ningún papel: la transición de una categoría a otra suele verse necesitada de la presión desde abajo. En una situación revolucionaria, sin embargo, esa relajación gradual de la represión se vuelve inestable y pueden hacerse precisas otras formas de intervención imperial para asegurar que las aspiraciones democráticas no excedan los límites establecidos por el dispositivo de «llave y candado» con la fracción dominante subalterna, incluida, «cuando es necesario, la acción militar»¹.

¹ En palabras del secretario adjunto para la Defensa de la Democracia y la Preservación de la Paz nombrado por Clinton, Morton Halperin, en «Guaranteeing Democracy», *Foreign Policy* 91 (verano 1993), p. 106.

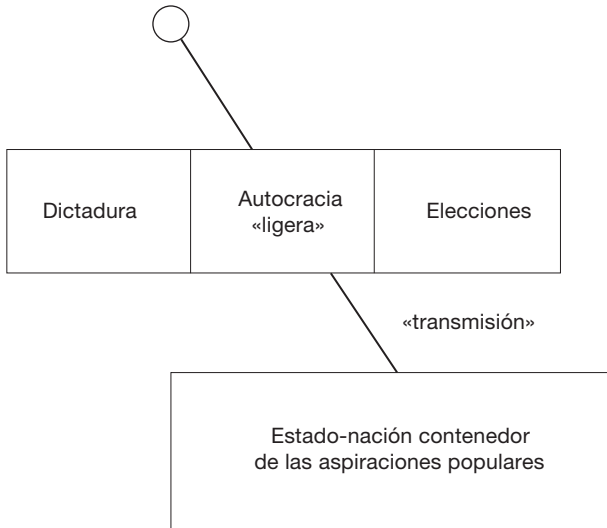
Esquemáticamente, podemos imaginar el proceso mediante el que Occidente ha ejercido su dominio sobre los estados-nación subalternos como una «caja de cambios» para controlar las demandas populares, que, en conjunción con las fracciones idóneas de la clase dominante local, permite adoptar distintos grados de coerción y consenso. La «caja de cambios del control imperial» permite a Occidente ajustar el compromiso con las clases dominantes subalternas según la presión popular que se ejerce en cada momento, y así fue como el gobierno de Obama «cambió de marcha», pasando de la autocracia de Mubarak al llamamiento en favor de «elecciones abiertas y transparentes». Esto supone, por supuesto, que el mecanismo de transmisión que conecta la caja de cambios al vehículo del Estado-nación permanezca intacto; en el caso de Libia, actualmente, una queja oída a menudo en Occidente es que nunca se ha puesto verdaderamente en marcha tal mecanismo, y que, por tanto, se requiere en primer lugar una intervención a fin de crear un Estado «de puertas abiertas», sin atender a los desastrosos resultados de intentos similares en Yugoslavia, Afganistán e Iraq.

Los propios estados-nación poscoloniales provienen de series complejas de compromisos entre los nacionalistas locales («occidentalizantes») y fuerzas adeptas a formas de autoridad no occidentales, así como entre las clases dominantes locales y el poder imperial. Se ha argumentado que el colonialismo moderno obtuvo sus principales victorias «no tanto mediante proezas militares y tecnológicas, sino sobre todo gracias a su habilidad para crear jerarquías no religiosas incompatibles con el orden tradicional»². La aspiración a la autodeterminación nacional tiene una base popular real, aunque constituya únicamente un objetivo político entre otros y se materialice en un dispositivo, el Estado-nación, importado en principio de Occidente. Sin embargo, sea cual sea la forma en que se configure ese compromiso, los intereses locales entrarán a formar parte de un pacto más amplio que da al poder imperial una ventaja de partida: la sociedad dominada se mantiene habitualmente cautiva en el seno de una estructura estatal poscolonial de origen extranjero, parcialmente adecuada, cuando más, a las circunstancias locales. El Estado poscolonial, que en la mayoría de los casos es una construcción torpe y mal ajustada, ha asumido la tarea de domesticar e integrar los procesos políticos preexistentes, regulando y pacificando las formas de autoridad y comunitarias tribales, nómadas, sedentarias o religiosas. En ese proceso, ha contribuido a configurar –aunque también se haya visto él mismo configurado por– un modelo específico de relaciones exteriores.

El dominio de Occidente se analiza a menudo en términos de la capacidad del capital transnacional de integrar en su red modos de producción anteriores; pero es igualmente urgente analizar las estructuras del imperalismo en términos de modelos de relaciones exteriores. Históricamente, las

² Ashis Nandy, *The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self under Colonialism*, Nueva Delhi, 1988, p. ix.

FIGURA 1: Caja de cambios del control imperial



relaciones exteriores entre tribus, o las relaciones entre imperios terrestres y nómadas que rondaban sus fronteras, se basaban en principios totalmente diferentes a los que han surgido durante los dos últimos siglos bajo el dominio de las potencias atlánticas. La idea de soberanía territorial del Estado-nación, que supone que los extranjeros se pueden excluir totalmente del cuerpo social, es incompatible con las formas tribales o nómadas tradicionales de autoridad. En el modelo contemporáneo de relaciones exteriores, el Estado es el mecanismo central mediante el que la clase dirigente puede a la vez demarcar un territorio en el que es soberano y controlar o movilizar dentro de su jurisdicción la «capacidad productiva» de la población en sus tratos con potencias extranjeras. Así como Occidente obtuvo una ventaja histórica de partida como sede original del capitalismo industrial, del mismo modo ha mantenido ventaja en el sistema estatal internacional, mediante el que las estructuras del Estado-nación poscolonial desarrolladas en Occidente se han impuesto a sociedades para las que ese formato no era en absoluto adecuado.

Esto plantea nuevos interrogantes sobre los intentos de Estados Unidos y sus aliados de encauzar o estabilizar los regímenes poscoloniales árabes frente a los levantamientos que se vienen produciendo, ya que la estabilización —mantener intacto el aparato estatal apartando a Mubarak o a Ben Ali— sólo puede ser una solución intermedia. Una revolución supone necesariamente la toma del poder y el desalojo mediante la rebelión popular de la clase dominante. El nuevo poder no tiene por qué ser la vanguardia autoproclamada de la siguiente clase en la progresión histórica del marxismo, como lo fueron los jacobinos para la burguesía o los bolcheviques para el proletariado; la revolución de 1979 en Irán representaba una

clara ruptura con ese modelo³. Pero si el aparato estatal existente se ve sacudido por la rebelión popular y ningún grupo es capaz de establecer una infraestructura alternativa de gobierno –una tarea históricamente asumida por los partidos políticos–, lo que surge entonces es un interrogno. Los estrategias occidentales están claramente decididos a impedir que esto ocurra, ya sea mediante presiones blandas o mediante ataques aéreos. Los intentos de liberarse de regímenes represivos deben ampliarse en algún momento hasta poner en cuestión todo el edificio del control imperial occidental. Investigar este aspecto del poder occidental desde una perspectiva histórica puede arrojar luz sobre el potencial de la actual revuelta en Oriente Medio y los obstáculos que afronta, y que tendrá que reconocer y superar para que la movilización popular que se está produciendo actualmente pueda convertirse en una auténtica revolución.

Diplomacias imperiales

El principio de autodeterminación nacional y el proyecto de imperialismo colonial se desarrollaron como ideas contrapuestas desde principios del siglo XIX. En América se produjeron en rápida sucesión la independencia de Estados Unidos, la revolución haitiana y las guerras de independencia hispanoamericanas, como precedente y prolongación, respectivamente, de la Revolución francesa. En Egipto el pachá Mehmet Ali, tras expulsar a los franceses y tomar El Cairo, fue reconocido como valí por los ulemas y a continuación por el sultán otomano Selim III, al que se enfrentó cada vez más radicalmente durante más de treinta años, emprendiendo una modernización que, de hecho, independizó al país del Imperio otomano: disolvió los gremios artesanales y comerciales, las órdenes sufíes y las estructuras tribales beduinas, así como la separación de las minorías religiosas no musulmanas (*milla* o *millet*), reuniendo como «*umma misriyya*» a toda la «nación egipcia» bajo un dinámico Estado centralizador. Mientras, en Europa, los gobernantes europeos se reunieron en Viena en 1814-1815 para redibujar el mapa del continente tras la derrota de Napoleón. Aquel cónclave de grandes potencias debió afrontar por primera vez en profundidad la «cuestión nacional»; el más sensible de los gobernantes allí reunidos al respecto era Metternich, al frente de un Imperio austríaco compuesto por catorce nacionalidades y muy consciente de la capacidad destabilizadora de la ideología de la soberanía nacional. Fue él quien puso de relieve una contradicción en la idea anglófona de libertad individual: «Uno de los sentimientos más naturales del hombre, el de la nacionalidad, ha quedado fuera del catecismo liberal»⁴. Desde el punto de vista conservador, la na-

³ Si bien es cierto que el espectro del reemplazo de clase inquietaba claramente a Washington en el momento de la Revolución de los Claveles de 1974 en Portugal, cuando el líder socialdemócrata Mario Soares le aseguró, al parecer, a Henry Kissinger que «no pretendía convertirse en un Kerenski» y éste le respondió que «tampoco Kerenski lo pretendía».

⁴ *Mémoires, documents et écrits divers laissés par le Prince de Metternich, Chancelier de Cour et d'Etat*, vol. III, París, 1880, p. 431.

cionalidad ofrecía una forma de cumplir el requerimiento del «peso sólido», necesario para el equilibrio de poder continental, al tiempo que difuminaba la exigencia de soberanía popular.

También los británicos fueron entendiendo que el apoyo a la independencia nacional podía emplearse como palanca en la competencia interestatal contra otras potencias europeas. La Francia posnapoleónica y el Reino Unido de los Países Bajos y Bélgica, ambos bajo la tutela informal británica, fueron intentos de restaurar el orden europeo anterior a 1789. Cuando más adelante los monarcas europeos tuvieron que conceder cierto constitucionalismo, la forma del Estado-nación sirvió para contener el «empuje desde abajo», como demostraría la secesión belga en 1830. «La auténtica función del constitucionalismo era proteger a la burguesía frente a los príncipes, que rechazaban los eslóganes revolucionarios, y frente a las masas, que los aceptaban⁵.»

El patrocinio británico del nacionalismo y cierto constitucionalismo dentro de los límites nacionales provenían de la intuición liberal de que el imperio formal puede en último término constreñir las oportunidades económicas; Adam Smith ya había indicado, en los últimos párrafos de *La riqueza de las naciones*, que la pérdida de las colonias británicas en Norteamérica podía ser una bendición disfrazada. Burke argumentó que las naciones europeas debían juzgarse por su capacidad para contener la extensión precipitada de la democracia, al tiempo que salvaguardaban el derecho hereditario a la propiedad⁶. Para asegurar el privilegio de clase, el mejor método era un equilibrio de intereses sometido a una corrección flexible, tanto en las relaciones internas como en las exteriores. Con el inicio de la era imperialista, esta percepción comenzó a evolucionar en el sentido de apreciar que el principio de la nacionalidad podía usarse como instrumento de la política exterior de Londres. En el Congreso de Viena Castlereagh aplicó por primera vez la protección de los derechos de las minorías nacionales en beneficio de los intereses británicos: mientras Polonia era despiadadamente dividida entre Rusia, Austria y Prusia, el secretario británico de Asuntos Exteriores estipuló que los monarcas imperiales debían reconocer su identidad «tratando como polacas» las «porciones de la nación que queden bajo sus respectivas soberanías». Al tiempo que esto permitía eventualmente la recomposición de un Estado-tapón, señalaba que si la presión popular obligaba en algún momento a los imperios a conceder reivindicaciones democráticas, allí habría una nación polaca para contenerlas, del mismo modo que un compartimento estanco en el casco de un navío puede contener una filtración.

La Francia napoleónica había promovido ya, no obstante, una forma alternativa de movilización nacional que Gran Bretaña no iba a tolerar: un Estado contendiente que impulsara su desarrollo social y económico median-

⁵ L. C. B. Seaman, *From Vienna to Versailles* [1955], Londres, 1964, p. 39.

⁶ Edmund Burke, *Reflections on the Revolution in France* [1790], en *Works*, vol. IV, Oxford, 1934, p. 67.

te el estímulo o el control directo, «confiscando» su sociedad civil y retardo al Occidente liberal. De las demás potencias europeas, sólo Prusia sería capaz de domesticar sus fuerzas democrático-burguesas en ascenso en una movilización nacionalista comparable. Mediante una revolución desde arriba y un conjunto de breves guerras victoriosas, Bismarck soldó una Alemania unida auténticamente soberana, en el sentido de no reconocer una autoridad superior a ella; pero las guerras napoleónicas habían demostrado que la clase dominante británica sólo iba a aceptar el principio de soberanía nacional bajo la égida de un Estado cliente o subalterno. De hecho, el apoyo británico a la autodeterminación nacional se iba a aplicar tanto para recortar la influencia de estados contendientes modernos sobre naciones sometidas rebeldes —desde la Europa napoleónica hasta la URSS y la República Popular China hoy día—, como para debilitar a rivales atrasados, como los imperios español y otomano.

Las posesiones en Europa del Imperio otomano eran particularmente vulnerables a los designios británicos, como lo eran las de Austria y Rusia. Ya a principios del siglo xvi se había instituido el llamado «régimen de capitulaciones», cuando Francisco I convenció a la Sublime Puerta para que concediera ciertas garantías de inmunidad a los viajeros franceses; en 1580 el sultán concedió a Inglaterra el protectorado de sus súbditos protestantes (dado que no los había, los drusos se convirtieron en sus principales beneficiarios). En el siglo xvii Austria y Rusia obtuvieron estipulaciones similares, asumiendo esta última la protección soberana de los serbios y griegos de religión ortodoxa. El sistema otomano de los *millets* garantizaba a las comunidades «extranjeras» cierta soberanía local dentro del imperio; pero durante el siglo xix las potencias imperialistas, en competencia mutua, comenzaron a servirse del régimen de capitulaciones para transformar los *millets* en comunidades clientes; así sucedió en el caso de la Rusia zarista con los intentos de los notables serbios y de los comerciantes griegos de obtener el control sobre la recaudación de impuestos en el Mar Negro, y también Gran Bretaña comenzó a dejar a un lado el conservadurismo del equilibrio-depoder para aprovechar las aspiraciones nacionales como estratagema para obtener acceso a ese mar y a todo el Mediterráneo oriental.

La reacción inicial de Castlereagh cuando estalló el movimiento griego por la independencia en 1821 fue la misma que la de Metternich: si Rusia sacaba ventaja de la rebelión griega, el equilibrio europeo estaría en peligro. Pero Canning, quien le sucedió como secretario británico de Asuntos Exteriores en 1822, rompió con la Santa Alianza, ofreciendo apoyo táctico a las rebeliones nacionales contra los imperios europeos allí donde convenía a los intereses británicos. Después de vencer a Napoleón, Gran Bretaña podría «dirigir de nuevo al mundo por la vía intermedia entre el despotismo y la revolución»⁷. Naturalmente, la incipiente preocupación por los dere-

⁷ Harold Nicolson, *The Congress of Vienna: A Study in Allied Unity, 1812–22* [1946], Nueva York, 1961, p. 272.

chos nacionales de las clases dominantes susceptibles de plegarse a los designios imperiales de Londres no se extendía a los súbditos coloniales de la propia Gran Bretaña.

¿Un Nuevo Mundo liberal?

Paradójicamente, fue en las Américas donde la estabilización del Estado-nación poscolonial bajo los auspicios imperial-liberales de Occidente cobró su forma actual. En las vastas extensiones del Nuevo Mundo, escasamente pobladas, no era obvio que las aspiraciones populares a la soberanía se canalizaran hacia la construcción de naciones independientes en lugar de crear, digamos, dos o tres grandes federaciones al estilo de los «Estados Unidos». Éste era, después de todo, el propósito de Bolívar y San Martín, como lo había sido el de George Washington. Latinoamérica ofrece, por tanto, percepciones valiosas sobre la configuración de estados-nación subalternos en el contexto del mundo liberal angloamericano que comenzaba a emerger.

Los británicos estaban implicados en Latinoamérica, como intermediarios comerciales y como mediadores diplomáticos, desde principios del siglo XVIII. Cuando la monarquía portuguesa se reubicó en Brasil en 1808, huyendo de la amenaza napoleónica, el Reino Unido estableció con ella un tratado comercial que favorecía a las importaciones británicas frente a las provenientes de Portugal. La obtención del libre acceso fue una de las principales preocupaciones de Gran Bretaña y Estados Unidos; de Londres partió la idea de una declaración de «Puertas Abiertas» para la región, aunque al final fuera el presidente Monroe quien la proclamara formalmente en 1823. El famoso comentario de Canning al año siguiente, referente a que «Hispanoamérica es ahora libre y si no gestionamos torpemente nuestros asuntos allí, pronto será inglesa», expresaba el alineamiento angloamericano en un gran diseño liberal, al tiempo que descartaba una recolonización de las Américas⁸.

Fue, por supuesto, la conquista napoleónica de la península Ibérica en 1808-1810 la que impulsó a las ciudades de Hispanoamérica a declarar su independencia; pero la construcción en el continente de distintos estados-nación tuvo lugar en un espacio ya delimitado por los intereses británicos y estadounidenses, a partir de los nodos urbanos que, con sus guarniciones españolas, habían adquirido ya ciertas características estatales. Aun así, la colonización incompleta de Latinoamérica dejaba grandes zonas incontroladas, en las que mestizos, amerindios, negros libres, esclavos africanos huidos y otros, excluidos de la propiedad y el honor asociados a la residencia urbana y a los títulos legítimos, se dedicaban a la ganadería y al comercio ilegal, amparados por bandas armadas de contrabandistas, *caudillos* y otros

⁸ Canning, citado en John Gallagher y Ronald Robinson, «The Imperialism of Free Trade» [1953], en E. C. Black (ed.), *European Political History, 1815–1870*, Nueva York 1967, p. 241.

«proveedores de violencia» privados, que a menudo realizaron una contribución decisiva al combate contra los españoles. Las exigencias de la vida fronteriza produjeron lealtades políticas inestables, mientras las grandes poblaciones amerindias se mantenían a menudo como fiel de la balanza.

Las nuevas elites gobernantes tenían ante sí la tarea de completar a su modo el proceso de colonización imponiendo disciplina a las poblaciones fronterizas rebeldes que no se adaptaban fácilmente al formato del Estado-nación. Ya fuera en las Américas o en los imperios territoriales de Eurasia, la demarcación de fronteras solía atravesar redes económicas y culturales pre-existentes y dejar pueblos divididos «a uno y otro lado». Como consecuencia, las lealtades podían escindirse y las poblaciones podían identificarse con una nación u otra. Allí donde la lucha por la independencia dio lugar a guerras fratricidas por encima de las fronteras estatales se realizó una nueva demarcación de los territorios que seguía o pretendía seguir líneas «nacionales», mientras las relaciones internas y exteriores se combinaban con compromisos de clase. Las guerras para resolver cuestiones diferidas en el momento de la independencia fueron tan feroces y prolongadas en Latinoamérica como la Guerra Civil en Estados Unidos.

El Imperio informal británico en Latinoamérica fue un participante silencioso en muchos de esos conflictos, y también Estados Unidos estuvo implicado en ellos desde el principio; pero nunca se puso en duda que los nuevos estados-nación al sur del Río Grande formaban parte de una jerarquía informal. Como le dejó claro a Bolívar en 1824 el secretario de Estado John Quincy Adams, la doctrina Monroe «no debe interpretarse como una autorización para que los débiles sean insolentes con los fuertes». Estados Unidos se negó a asistir a la Conferencia Panamericana convocada por Bolívar en Panamá dos años después, y comenzó, en cambio, una larga sucesión de intervenciones y anexiones (México, Puerto Rico), mientras que Gran Bretaña se apoderaba de las islas Malvinas / Falklands en 1833 y triplicaba su territorio en Belice [Honduras británica], a expensas de Guatemala, en 1836. Estados Unidos y Gran Bretaña controlaban no sólo la circulación de mercancías y capital, sino también la amplitud de la soberanía nacional en cada país. En la mayoría de los casos, ésta permanecía en el último peldaño de la escala. Hasta la década de 1980, después de la noche más tenebrosa de terror estatal, no se decidió Estados Unidos a permitir elecciones «libres y justas», siempre que los resultados esperados no se consideraran incompatibles con los intereses de Occidente.

Banderas y derechos

Durante la primera mitad del siglo XIX, el empleo por la diplomacia británica de la cuestión nacional –adaptando una versión conservadora del modelo revolucionario o anticolonial francés a los requerimientos del dominio global– fue todavía esencialmente táctico e intuitivo; pero aun así se aludía a determinados principios. El concepto de nacionalidad civil basado en los

derechos naturales, en el que las asociaciones étnicas resultaban secundarias, tenía una larga tradición. La idea de los derechos innatos fue formulada por los terratenientes anglosajones contra los reyes normandos y luego se extendió a toda Inglaterra y Gales durante los siglos que siguieron a la Conquista. Bajo los Tudor, la construcción del Estado y la expansión en ultramar se combinaron como aspectos de un mismo proceso. Tomás Moro y Erasmo reformularon las nociones de derechos civiles y cristianismo en términos universalistas. La Reforma les añadió un matiz «nacional» popular, sin eliminar el contexto universalista. Francis Bacon, en una llamativa anticipación de la sociedad transnacional en que se iba a convertir el Occidente anglófono, comparó el destino de Esparta, que había mantenido celosamente su pureza étnica, pero cuyo proverbial valor se había visto finalmente socavado por el exiguo número de ciudadanos, al del Imperio romano, que acogía como ciudadanos a los extranjeros y hasta a naciones enteras.

Su modelo consistía en otorgar la ciudadanía (a la que llamaban *ius civitatis*) a la mayor cantidad posible de gente [...] Añádase a esto su costumbre de crear colonias, con lo que el modelo romano se transmitió al suelo de otras naciones [...] No fueron los romanos los que se extendieron por el mundo, sino que fue el mundo el que se extendió sobre los romanos, y aquella vía aseguró su grandeza⁹.

Ahí se constata la sagaz apreciación del hecho de que, al proyectar el poder hacia un gran espacio oceánico, la multiplicidad de etnias de quienes lo poblaban no era necesariamente de primera importancia, con tal que se mantuviera la aspiración a un dominio global. De hecho, la indiferencia hacia las filiaciones etno-políticas o político-religiosas podía otorgar un carácter auténticamente universal al proyecto liberal anglófono. Esa perspectiva subyacía bajo la política de crear estados-nación como contenedores que satisficieran la demanda de soberanía popular al mismo tiempo que la situaban bajo un régimen específico de control, entregando el gobierno a elites subalternas adictas. La nueva nación, inspirada en la doctrina de los derechos innatos actualizada en el *ius civitatis* del Imperio británico, era idealmente, ante todo, una provincia de la superpotencia anglófona, y sólo secundariamente una comunidad «étnica» particular o de otro tipo.

Como demostraba la experiencia latinoamericana, el «gobierno responsable» podía ser ejercido por clases dominantes no anglófonas, siempre que respetaran los intereses británicos y estadounidenses. Poco a poco iban a surgir muchos más aspirantes al autogobierno. El geógrafo inglés Halford Mackinder observó en 1904 que el proyecto de dominio global tendría que ajustarse en último término a un mundo de estados formalmente segregados. A diferencia del modelo de relaciones exteriores imperio-nómadas, en el que «cualquier explosión de fuerzas sociales» se «disipaba en el entorno

⁹ Francis Bacon, «The True Kingdom of Greatness and Estates» [1624], *Essays and New Atlantis*, Roslyn (NY) 1942, p. 127.

circundante de espacios desconocidos y caos bárbaro», a partir de entonces dominaría la tendencia a ocupar todo el espacio bajo soberanías territoriales. Cualquier conflicto social tendría, así,

un eco perceptible en el otro extremo del globo, con lo que se verían sacudidos los elementos más débiles del organismo político y económico del mundo [...] Fue, probablemente, cierta conciencia nebulosa de este hecho la que fue al final desviando en todas partes la atención de los hombres de Estado de la expansión territorial al esfuerzo por una eficiencia relativa¹⁰.

Cuando Estados Unidos empuñó el cetro del cosmopolitismo liberal, reprodujo la interpretación de la nacionalidad basada en los derechos innatos en una versión aún más radical: la noción del *ius civitatis* se vio intensificada por la anomia que acompañaba a la inmigración a medida que sucesivas oleadas de nuevos recién llegados se iban integrando en el «americanismo» civil pseudoétnico de los colonos. Aunque cada una de ellas iba añadiendo su propia experiencia de clase y otras, todas ellas compartían la idea de una nacionalidad desterritorializada, basada en los derechos individuales, en combinación con la constitucionalidad específica formulada por Locke. Este espacio político-económico mayor se puede entender, adoptando la terminología de Mackinder, como un «centro» desde el que el liberalismo –y el capitalismo inserto en su particular constitucionalidad– se iría difundiendo al resto del globo. Sin embargo, a lo largo de ese proceso, la estrategia de localizar y fomentar elites gobernantes subalternas chocó con un movimiento que iba en dirección opuesta, articulando la soberanía popular desde abajo.

Los nacionalismos desde abajo aportaron inevitablemente interpretaciones alternativas de la comunidad, la lealtad y la ciudadanía, especialmente en el caso de estados contendientes que desafiaban el orden liberal. En Francia la Revolución proclamó un *ius soli*, o derecho de ciudadanía por nacimiento, que prefiguraba estructuras laico-republicanas similares en otros lugares. Esa idea ilustrada influyó sobre el concepto de ciudadanía en las Américas, aunque en Estados Unidos el individuo como sujeto portador de derechos siguiera por delante del ciudadano miembro de la república. Según la concepción francesa, las leyes prevalecen sobre los derechos individuales porque consagran el interés general, mientras que para el liberalismo «existe una confrontación entre los intereses particulares (los dominantes) y el interés colectivo»¹¹. En los *länder* alemanes que emergieron del dominio napoleónico, el *ius soli* se vio desafiado, a su vez, por el *ius sanguinis* ancestral de la pertenencia a una comunidad étnica. Este concepto de nacionalidad enraizado en las relaciones intertribales, junto con las cualidades sagradas atribuidas al territorio, iba a legitimar algunos de los peores excesos de la «expul-

¹⁰ Halford Mackinder, «The Geographical Pivot of History», *Geographical Journal*, vol. 23, núm. 4, 1904, p. 422.

¹¹ Jean Liberman, *Démythifier l'universalité des valeurs américaines*, París, 2004, p. 21.

sión de los extranjeros» [limpieza étnica]; hasta hace muy poco era el principio nacional prioritario en Alemania y sigue siéndolo todavía en Hungría, Japón e Israel. Los distintos principios de la nacionalidad, así como el desarrollo desigual generado por la difusión del capital, han complicado la lucha entre las clases dominantes atlánticas y las fuerzas democráticas que tratan de emanciparse de su supremacía político-económica.

Adversarios comunistas

Los principales oponentes provenían de la izquierda marxista. La primera articulación del principio de autodeterminación nacional proviene de 1865, cuando la Conferencia de Londres de la Primera Internacional adoptó una resolución para contrarrestar la «influencia creciente de Rusia en Europa [...] aplicando a Polonia “el derecho de cada pueblo a disponer de sí mismo” [y a restablecer el país] sobre una base social y democrática»¹². Pero la cuestión nacional siempre ha conllevado cierta ambivalencia en el análisis teórico marxista. Marx y Engels planteaban en general la cuestión en términos de las consecuencias políticas de las posiciones de principio. Mientras que el *Manifiesto Comunista* había proclamado que «los obreros no tienen patria», Marx indicaba a Engels en una carta de 1866 que ese cosmopolitismo abstracto podía convertirse fácilmente en la asunción tácita de la hegemonía ejercida por la nación dominante¹³; sin embargo, los términos teóricos para analizar la jerarquía interestatal quedaron dispersos en esbozos y fragmentos. El llamamiento de la Internacional se basaba en su crítica de la explotación capitalista, y cuando las siguientes generaciones de marxistas dirigieron sus dardos contra el imperialismo y el militarismo, en general no solían ir más allá de esa crítica.

Los debates se centraron en cómo se podía neutralizar o instrumentalizar la autodeterminación nacional para facilitar una revolución obrera, eso si no era directamente rechazada como una cuestión que no tenía por qué preocupar al movimiento obrero, como en el caso de Rosa Luxemburg. Los austromarxistas –preocupados por «resolver» la cuestión nacional sin romper la integridad territorial de la doble monarquía, con el fin de mantener territorio suficiente para una economía socialista avanzada– propusieron instituir la autonomía cultural mediante un sistema de pasaportes que autorizaba a los portadores el uso de su lengua nacional y todo lo relacionado con ella. Otto Bauer señaló en 1907 que la concesión de la autodeterminación territorial a las comunidades de obreros inmigrados sólo

¹² *The General Council of the First International 1864–1866. The London Conference 1865. Minutes*, Moscú [n.d.], p. 246. El apoyo a la causa polaca contra la Rusia autocrática, paradigma de la supresión de la democracia, fue un tema central de la izquierda europea desde 1848.

¹³ Karl Marx, carta a Engels del 20 de junio de 1866, en *Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx*, vol. III, Stuttgart, 1913. Se puede consultar en castellano en [http://es.wikisource.org/wiki/Carta_de_Marx_a_Engels_\(20_de_junio_de_1866\)](http://es.wikisource.org/wiki/Carta_de_Marx_a_Engels_(20_de_junio_de_1866)).

serviría para prender una reacción en cadena de luchas nacionales sin fin, dado que el capital reclutaba una cantidad cada vez mayor de trabajadores para emplearlos lejos de su lugar de origen¹⁴.

Contra esa posición, Lenin argumentaba que los socialistas debían defender sin ambages el derecho a la secesión territorial. Los bolcheviques rechazaban la suposición de los austríacos de que las distinciones nacionales pudieran durar. Lenin las consideraba características de la época de la revolución burguesa; una vez que sus demandas quedaran satisfechas, perderían su importancia política. A fin de no verse superados por las reivindicaciones nacionalistas de otros partidos en países donde ésa era todavía una cuestión clave, los trabajadores debían defender el derecho a la secesión. ¿No sería mejor para los trabajadores ucranianos conquistar el poder sobre la base de ese programa, separarse de Rusia y regresar a una Federación revolucionaria por su propia voluntad, en lugar de mantenerlos «dentro» y negociar derechos que serían inevitablemente limitados?¹⁵.

Tal internacionalismo radical sólo podía funcionar, obviamente, en el contexto de una revolución mundial en marcha. Una vez que los bolcheviques se vieron obligados a replegarse, el derecho a la secesión quedó comprometido también. La URSS, como Estado contendiente frente al núcleo liberal, adoptó obligadamente aspectos del programa austromarxista; la mezcla resultante de un enfoque territorial restringido con una autonomía cultural subordinada contribuiría finalmente a la disolución relativamente suave de la URSS, en 1991, en quince estados-nación distintos, cada uno de los cuales contenía minorías nacionales apreciables. Retrospectivamente, esto revela la contradicción inserta en la raíz de la estrategia marxista. Mientras que se profundizaba teóricamente en la superación de la economía capitalista y la de la sociedad de clases, la política de las nacionalidades y de las relaciones exteriores sólo se elaboró táctica y polémicamente.

La revolución rusa se produjo precisamente cuando Washington comenzaba a reemplazar a Londres como centro dirigente del bloque atlántico. La estrategia estadounidense se vería reforzada por una ideología formalmente antiimperialista, defensora de la libertad. Desde muy pronto, Woodrow Wilson se esforzó por canalizar las aspiraciones democráticas haciéndolas compatibles con los intereses occidentales:

Oriente se abrirá y transformará lo queramos o no. Lo que hay que imponerle son las normas de Occidente; las naciones y pueblos que se han mantenido sin cambios apreciables durante siglos tienen que apresurarse y convertirse en parte del mundo universal del comercio y de las ideas [...] Ése es nuestro deber particular, como lo es también el de Inglaterra: moderar el proceso en

¹⁴ Otto Bauer, *Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie*, Viena 1907, p. 340.

¹⁵ V. I. Lenin, «Ucrania», 28 de junio de 1917, en *Obras Completas*, vol. 32, Moscú, 1985, pp. 365-66.

interés de la libertad; impartir a los pueblos así impulsados a la vía del cambio [...] el hábito del derecho [...] que nosotros recibimos hace tiempo del vigoroso proceso de la historia inglesa; asegurar para ellos, cuando podamos, el intercambio libre y el desarrollo natural que los hará al final miembros iguales de la familia de las naciones¹⁶.

En 1917, llamado a responder a la crisis política en que se había hundido Europa después de haber conducido a Estados Unidos a la Gran Guerra, Wilson declaró que el principio guía debía ser la autodeterminación nacional: «Que ninguna nación trate de extender su jurisdicción sobre otra nación o pueblo, sino que cada pueblo sea libre para determinar su propia política, su forma propia de desarrollo, sin obstáculos, sin amenazas, sin miedo; los pequeños junto a los grandes y poderosos»¹⁷. Pero al igual que en el caso de la advertencia estadounidense a Bolívar de «no ser insolente con los fuertes», también ahora se esperaba que «los pequeños» no desafiaran el orden general establecido por los grandes y poderosos.

La Revolución bolchevique amenazaba trastocar todo esto. El gobierno revolucionario declaró el fin de las hostilidades en el Frente Oriental, instigando a los soldados rusos a fraternizar con sus antiguos enemigos alemanes, y publicó los tratados secretos del zar, exponiendo las maquinaciones del sistema interestatal y minando así el apoyo popular de los aliados occidentales. En Petrogrado se imprimieron decenas de miles de periódicos en alemán para su distribución entre los soldados germanos, con la esperanza de suscitar una revolución. Cuando Trotski llegó a Brest-Litovsk para discutir los términos de un tratado de paz con Alemania, Lenin y Stalin —entonces comisario del pueblo para las nacionalidades— lanzaron un llamamiento a los «trabajadores musulmanes de Rusia y del este», anunciando la abrogación de la partición zarista de Persia con Gran Bretaña en 1907, la partición de Turquía y la ocupación de Armenia. Cuando se inició la conferencia de Brest-Litovsk, Trotski lanzó otro llamamiento no sólo a los trabajadores de Europa, sino también a sus «pueblos oprimidos y desangrados»¹⁸.

La cruzada de Wilson

Pero si las posiciones marxistas sobre la autodeterminación nacional seguían siendo esencialmente tácticas, la perspectiva occidental era estratégica. De hecho, fue en aquel momento cuando el patrocinio de la construcción de naciones por las potencias occidentales pasó de un enfoque intuitivo ecléctico a otro científico. En el verano de 1917 Wilson encargó a su jefe de estado mayor, el «coronel» Edward M. House, la convocatoria del grupo de expertos que acabaría conociéndose como «the Inquiry», con el fin de formular

¹⁶ Woodrow Wilson, «Democracy and Efficiency», *Atlantic Monthly*, vol. 87, núm. 521, marzo de 1901, pp. 289–99.

¹⁷ W. Wilson, discurso ante el Senado estadounidense, 22 de enero de 1917.

¹⁸ Louis Fischer, *The Soviets in World Affairs*, ed. abreviada, Nueva York, 1960, p. 15.

la estrategia estadounidense para estructurar el mundo de la posguerra. El propio presidente propuso a su joven asesor Walter Lippmann como secretario; el director de la Sociedad Geográfica Americana, Isaiah Bowman, y el historiador de Columbia James Shotwell fueron influyentes miembros del grupo. Equipados con mapas detallados, estudios de los movimientos nacionales europeos en Europa y datos demográficos y económicos, «the Inquiry» se puso a dibujar fronteras que garantizaran el respeto al principio de autodeterminación sin crear nuevas rivalidades, y dio a conocer su redacción final el 22 de diciembre de 1917, el mismo día que comenzó la conferencia de Brest-Litovsk. El 8 de enero de 1918 Wilson pronunció su famoso discurso de los Catorce Puntos, de los que del 6 al 13, sobre la autodeterminación nacional y las cuestiones territoriales, provenían del informe elaborado por «the Inquiry»¹⁹.

La estrategia de Wilson puso los recursos de Estados Unidos al servicio de un proyecto de gobernanza imperial global, en el que los estados-nación emancipados de los difuntos imperios operarían como clientes de Occidente contra el bolchevismo. Fue en aquel momento cuando Estados Unidos planteó formalmente como principio universal un *ius civitatis* basado en los derechos civiles, estableciendo las bases de una «comunidad internacional» configurada en torno al núcleo lockeano que defendería esos derechos contra autoridades ilegítimas, y fue ese principio el que prevaleció en Versalles. La dirección soviética no tuvo dificultad en denunciar la parcialidad con la que los estadounidenses lo aplicaban, con el fin obvio de crear un cordón sanitario en Europa oriental contra la Rusia revolucionaria. En un intercambio de notas entre los bolcheviques y Wilson en septiembre de 1918, Karl Radek escribió: «Ustedes exigen la independencia de Polonia, Serbia y Bélgica y la libertad para los pueblos de Austria-Hungría [...] pero, curiosamente, no apreciamos en sus demandas ninguna mención de la libertad para Irlanda, Egipto o la India, por no hablar de las islas Filipinas»²⁰. Las propuestas de Wilson nunca estuvieron destinadas, por supuesto, a servir a la causa de una igualdad soberana genuina; lo que pretendían era asegurar el dominio occidental, aislando y haciendo frente a cualquier adversario, al tiempo que abría otras sociedades al libre acceso, no sólo económico, sino también político.

Estados Unidos, seguido por las principales potencias europeas, suscribió también formalmente ahora el principio de la representación electoral para la gran mayoría de la población [masculina], lo que supuso un viraje histórico: la cruzada de Wilson por la democracia dio el pistoletazo de salida hacia el reconocimiento del sufragio universal, al menos en los países avanzados de Occidente. Si bien la puesta en práctica real de la reforma electoral en Europa descarriló pronto como consecuencia de la intensificación

¹⁹ G. J. A. O'Toole, *Honorable Treachery. A History of US Intelligence, Espionage and Covert Action*, Nueva York, 1991, pp. 306–307.

²⁰ Citado en Fischer, *The Soviets in World Affairs*, p. 102.

de la lucha de clases, esto sólo confirmaba que el mundo no había «quedado asegurado para la democracia», sino más bien compartimentado en estados-nación que idealmente seguían líneas compatibles con los intereses generales de la clase dominante. Así sucedió, en particular, en Oriente Medio, donde Francia y Gran Bretaña crearon los actuales estados-nación a partir de las provincias del Imperio otomano, reclutando nuevos equipos gobernantes para contrarrestar el poder de los notables suníes locales, aunque en este caso no se hiciera ninguna concesión a las aspiraciones democráticas del pueblo, aparte de enfrentar entre sí a las diferentes elites.

En Europa central y oriental, los inestables sistemas parlamentarios creados en el tumulto revolucionario que siguió a la Gran Guerra dieron pronto lugar a diversas dictaduras. La larga mano de Occidente no estuvo totalmente ausente de esos acontecimientos, pero las clases dominantes indígenas no necesitaban un apoyo exterior para comprender la naturaleza de la amenaza que afrontaban. La perspectiva de que los socialistas obtuvieran mayorías electorales inspiró desde muy pronto a los intelectuales orgánicos de las clases dominantes conservadoras el desarrollo de ideas para restringir o manipular la democracia. En Italia los neomaquiavélicos encabezados por Gaetano Mosca pretendían movilizar a las masas mediante un lenguaje de lucha existencial, una estética de la política que invocaba la civilización, el destino y la guerra. En Alemania Carl Schmitt defendió la necesidad del estado de excepción para evitar que el sufragio universal se empleara en favor de una transformación socialista; pero fue Joseph Schumpeter quien formuló, en *Capitalismo, socialismo y democracia* (1942), la idea de un sistema electoral restringido, limitado a optar entre «elites democráticas» de confianza, lo que se convertiría en un elemento clave de la estrategia estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial.

Perspectivas de la Guerra Fría

Tras la Segunda Guerra Mundial, las potencias atlánticas afrontaban el problema de ampliar el concepto de ciudadanía basado en los derechos civiles a una «comunidad global de estados-nación»²¹. Ante el cambiante equilibrio de fuerzas, y sobre todo el potencial de un patrocinio nacional alternativo por la Unión Soviética y la República Popular China, había que desmantelar los restos de los imperios coloniales europeos. De nuevo la regla tácita del proceso de descolonización fue la del compromiso entre los supervisores neocoloniales y las burguesías nacionales aspirantes al poder, aun cuando éste quedara en ocasiones enmascarado por enérgicas luchas de liberación nacional. La India ofreció el ejemplo paradigmático de este proceso. La agitación por la independencia promovida por el Partido del Congreso nunca pretendió ir más allá de «generar presiones para mejorar los compromisos con la potencia ocupante extranjera», lo que llevó

²¹ Anthony Giddens, *The Nation-State and Violence*, Cambridge, 1985, p. 259.

al «compromiso más avanzado» posible, esto es, la retirada de las fuerzas de ocupación británicas²².

El marco intelectual de la estrategia estadounidense durante este periodo fue proporcionado por la teoría de la modernización, y más en general por las disciplinas académicas de las ciencias políticas, la política comparada y las relaciones internacionales. Ya antes de la guerra Charles Merriam había logrado vincular la ciencia política estadounidense a las fundaciones empresariales Rockefeller, Ford y otras con proyectos de investigación a gran escala. Los trabajos de Merriam proporcionaron el borrador para la combinación del autoritarismo con un electoralismo mínimo –sin descartar la opción de la coerción directa–, que iba a guiar la política estadounidense hacia el emergente mundo poscolonial. En 1953 el gobierno de Eisenhower creó –a partir de la CIA, Radio Europa Libre, una junta de estrategia psicológica y miembros del Centro de Estudios Internacionales del MIT– el Comité sobre Actividades de Información Internacional, un grupo de expertos dirigido por la CIA y la Fundación Ford y encabezado por el economista Max Millikan. El objetivo de ese comité era coordinar la campaña intelectual y política contra la URSS. Millikan y su colega, el economista Walt Rostow, otro de los padres de la teoría de la modernización, señalaron la necesidad de «negar la peligrosa mística» de que «sólo Moscú y Pekín» podían transformar los países subdesarrollados²³. Se precisaba un programa alternativo para ayudar a reestructurarlos siguiendo las líneas liberales anglófonas, identificando a los gobernantes subalternos en los que se podía confiar que «dejaran la puerta abierta», fijando los límites a la actividad política legítima y proscribiendo o neutralizando cualquier intento de estructuración socialista.

Esto se concretó en un vasto proyecto de investigación financiado por la fundación Ford, «The Inter-University Study of Labour Problems in Economic Development», en el que iniciaron su carrera muchos de los grandes politólogos estadounidenses de posguerra; la colosal escala de la operación bastaba para establecer su hegemonía intelectual, a partir del postulado de que «la sociedad ideal era la sociedad capitalista “gestionada”, “abierta”, “opulenta” del mundo occidental que había alcanzado su apogeo en Estados Unidos»²⁴. Aquellos a quienes se prepararía para gestionar los dispositivos de «llave y candado» desde esta perspectiva serían, sin embargo, en muchos casos autócratas y dictadores. Como confió *in camera* al Comité de Relaciones Exteriores del Senado el secretario de Estado Dulles en 1953, «no es el tipo de gente a la que en circunstancias normales querríamos apoyar [...] Nos gustaría encontrar a otros, pero en tiempos como éstos, con la agitación que conmociona al mundo y divide los espíritus, sabemos que

²² Ajit Roy, *Contemporary India-A Perspective*, Bombay, 1986, p. 29.

²³ Citado en Irene Gendzier, *Development Against Democracy: Manipulating Political Change in the Third World* [1985], Hampton (CT), 1995, p. 28.

²⁴ Anthony Carew, *Labour under the Marshall Plan*, Manchester, 1987, p. 196.

no podemos realizar una transición sin perder el control de toda la situación»²⁵.

¿Pero cómo organizar elecciones «libres y justas», cuyos resultados se pudieran considerar de antemano «seguros»? El *Preface to Democratic Theory* de Robert Dahl (1956) proponía el concepto de poliarquía para describir una alternancia funcional en el gobierno con el voto de la mayoría. Los parámetros de una democracia oligárquica fueron explorados en *Political Man* (1959), de Seymour Martin Lipset, uno de los participantes en el programa de «Estudio de los Problemas Laborales». Lipset argumentaba que la premisa para una democracia estable era un «sistema común de valores» que sostuviera la alternancia constitucionalmente asegurada de las elites legítimas. Para poder participar en la política electoral, un partido no debía actuar como representante de ninguna clase claramente definida, porque si su base electoral reflejaba demasiado estrechamente las «divisiones sociales básicas» no se podría alcanzar un compromiso. Un país no sería calificado como democracia estable si un partido «totalitario» —esto es, comunista— podía triunfar obteniendo el 20 por 100 de los votos o lo había hecho en algún momento durante los últimos veinticinco años. Con otras palabras, el criterio para la democracia era el resultado del proceso electoral —un gobierno obediente a la dirección estadounidense, al mando de una sociedad compatible con los intereses capitalistas de Occidente—, más que la soberanía popular en sí misma. De hecho, una democracia estable podía «basarse en la creencia general de que el resultado de las elecciones no supondrá una diferencia muy grande en la sociedad»²⁶.

¿Democratización?

Las décadas de 1960 y 1970 se caracterizaron, no obstante, por un desplazamiento hacia la dictadura. El golpe militar de 1965 en Indonesia derrocó al presidente Sukarno y llevó al poder al general Suharto; las subsiguientes matanzas de miembros del Partido Comunista Indonesio eliminaron literalmente la amenaza de la izquierda en el país más populoso del sureste de Asia. Estados Unidos estaba profundamente implicado en el acondicionamiento de una elite clientelaria alternativa en Indonesia, desde generales y gestores hasta profesores de universidad, proceso en el que la Fundación Ford desempeñó un papel clave. El golpe de Suharto fue un ejemplo dramático de cómo retroceder de una autocracia ilustrada a la dictadura, cuando la soberanía popular amenazaba convertirse en una fuerza real²⁷. El baño de sangre en Indonesia fue aplaudido, como se sabe, por la

²⁵ *Executive Sessions of the Senate Foreign Relations Committee (Historical Series)*, vol. 5, Washington D. C., 1976, p. 387.

²⁶ Seymour Martin Lipset, *Political Man*, Londres, 1969, pp. 32, 48. No cabe extrañarse de que sólo el Occidente anglófono, Australia, Nueva Zelanda, Escandinavia, los Países Bajos y Suiza fueran considerados democracias estables según los parámetros de Lipset.

²⁷ David Ransom, «Ford Country: Building an Elite for Indonesia», en Steve Weissman (ed.), *The Trojan Horse: A Radical Look at Foreign Aid*, San Francisco, 1974.

revista *Time* como «la mejor noticia para Occidente en Asia». El retroceso de la democracia a la dictadura iba a proseguir a partir de entonces, en particular en Latinoamérica. Los generales brasileños ya habían proclamado la ley marcial en 1964; en 1973 fue derrocado el gobierno de Allende en Chile y en 1976 una Junta militar tomó el poder en Argentina.

Éste era el contexto en el que William Douglas publicó en 1972 *Developing Democracy*. Según Douglas, era un error pensar que sólo se podía confiar a dictadores la tutela de su población. Una «democracia reglamentada» podría eliminar la necesidad de coerción, con tal de que se viera reforzada por «mecanismos de trasplante» en forma de organizaciones de masas fiables y de que la población se viera expuesta a un flujo de información cotidiano que configurara su perspectiva general²⁸. El pensamiento de Lipset, Douglas y otros contribuyó al cambio de dirección política que acompañó la ofensiva contrarrevolucionaria del gobierno de Reagan en la década de 1980 y que supuso un giro del desarrollismo político, idea central de la política comparada, a un tipo de «promoción de la democracia» en el que Occidente intentaría ejercer su influencia ante todo mediante la «sociedad civil» y la economía. Esto suponía, por supuesto, un acceso sin trabas y una economía liberalizada, mantenidos ambos por las instituciones globales creadas por el Occidente lockeano –FMI, Banco Mundial, etcétera– y por ministros de finanzas subalternos, formados habitualmente en las universidades de elite estadounidenses.

Pero el propio éxito del proyecto neoliberal de las décadas de 1980 y 1990 ha servido también para empobrecer y deslegitimar al Estado como estructura de protección social. El desencadenamiento del capital global, combinado con la presión occidental por la «apertura» tras la Guerra Fría, ha comercializado y fracturado cada vez más la soberanía fuera del núcleo formado por las principales potencias atlánticas, socavando los «contenedores nacionales» que Occidente promovió en otro tiempo. El resultado ha sido una crisis generalizada del Estado-nación en el que se ha basado durante tanto tiempo el dominio occidental. Esta pérdida de la estructura subyacente se ha comparado a los cambios que «hicieron naufragar Europa» en los siglos XVI y XVII²⁹. Si es así, el mecanismo de transmisión que vincula la influencia occidental a la gestión por parte de una clase gobernante subalterna corre el riesgo de descomponerse; sacudir una caja de cambios rota deja de tener sentido.

El reto árabe

El mundo árabe, en rebelión y de nuevo bajo el ataque de Occidente, se ve sumergido en una triple crisis: la crisis de la hegemonía occidental, la

²⁸ William Douglas, *Developing Democracy*, Washington, 1972.

²⁹ Ronnie Lipschutz, *The Constitution of Imperium*, Boulder (CO), 2009, p. 8.

crisis del capital y la crisis del Estado-nación. Los pueblos árabes han tenido que arreglárselas por su cuenta en unos países descoyuntados por la creciente privatización, la corrupción rampante y el desempleo de grandes masas de población, sobre los que pesa la amenaza del hambre si los precios de los alimentos sufren la menor subida. En todo Oriente Medio y el norte de África están en riesgo las propias condiciones de supervivencia: el suministro de agua dulce se está agotando, el rendimiento de las cosechas cae y aumenta la presión demográfica. Todos los estados de la región están fracasando incluso en su papel de contenedores de una reserva de mano de obra formada por la población excedente, y tampoco cabe invocar ya los mantras del panarabismo u otros aún más distantes, como la *Umma* islámica y el califato, para corregir los errores de la construcción de estados poscoloniales bajo los auspicios de Occidente. Los defensores de la unidad islámica a mediados del siglo xx, como Sayyid Qutb o Maulana Maududi, que denunciaban el Estado-nación como un «ídolo» blasfemo, subestimaban la posibilidad de que todos y cada uno de los 57 países con mayoría musulmana siguieran, como han seguido, esa vía. Es imposible ignorar el proceso que, alternando victorias y derrotas, configuró un marco nacional en cada jurisdicción y ha cristalizado dejando sus propios posos históricos y culturales.

En cuanto a la unidad árabe, no es algo que esté simplemente a la vuelta de la esquina, aunque se consiga hacer retroceder la influencia occidental. Durante toda su historia, los árabes han mantenido menos contactos entre sí de lo que se suele suponer. Como subrayan los combates en Libia en el momento en que escribo estas líneas, los espacios en los que habitan suelen estar separados por franjas desérticas. De ahí que, si se consigue en algún momento algo parecido a una «unidad árabe», tal como ha argumentado Nazih Ayubi, «es más probable que sea mediante un reforzamiento, y no una negación, de los estados territoriales en el mundo árabe»³⁰. Pero la actual rebelión incide precisamente ahí, tomando por asalto, como no podía ser de otra manera, estructuras estatales congeladas durante décadas en forma de dictaduras y autocracias erigidas sobre un compromiso entre los gobernantes locales y sus supervisores occidentales. No se trata, pues, de una revolución en la que las fuerzas sociales asociadas con un nuevo modo de vida presionen para ocupar el lugar que dejan unas elites gobernantes difuntas, incapaces de mantener la línea. Por el contrario, bien puede suceder que las actuales tormentas que agitan Oriente Medio y el norte de África formen parte de una depresión planetaria caracterizada por el debilitamiento estructural del Estado poscolonial mediante el que Occidente ha mantenido durante mucho tiempo su control. Esto no significa negar el esfuerzo y el valor de los que han dado el primer paso, a menudo arriesgando sus propias vidas; pero, al igual que en el giro hacia la izquierda en Latinoamérica o la democratización de países como Indonesia, en las luchas que tienen lugar en Oriente Medio y el norte de África se cons-

³⁰ Nazih Ayubi, *Over-stating the Arab State*, Londres, 2009, p. 148.

tata no sólo el debilitamiento de la supremacía occidental sino también cierta desintegración del Estado-nación, que –una vez desconectado de las estructuras de la dirección anglo-americana y europea y desalojados sus dirigentes subalternos– habría que asentar en el derecho y defender en la práctica como logros soberanos de los propios movimientos populares.